

Señor Ministro:

En 2007 fojas vienen a consideración de esta Fiscalía de Estado las actuaciones por las cuales la Sra. VANESA RUSSO, en representación de la razón social "PAMPA ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA" (ex-"PETROBRAS ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA"), interpuso recurso de apelación por ante el Poder Ejecutivo -previsto en el artículo 120 del Código Fiscal- contra la Resolución N°107/18-IND de la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.).

- I -

ANTECEDENTES

A

Mediante Resolución N° 1192-5/09 del 24.06.2009 (fs. 1179/y vlta.) la Regional Rosario de la A.P.I. determinó ajustes impositivos en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos a cargo de la recurrente, por diversos períodos (02 a 05 y 07 a 12/2005 y 01 a 12/2006) y en consecuencia se le requirió a la sumariada el ingreso de las sumas dinerarias consignadas en la liquidación contenida en el decisorio.

Siendo notificada del acto el 29.06.2009 (f. 1187), interpuso recurso de reconsideración en fecha 07.08.2009, conforme fojas 1189/1214, que fue rechazado por el ente fiscalizador a través del acto mencionado en el encabezado de éste parecer (fs. 1786/1792), reiterándole asimismo el requerimiento para el ingreso de las sumas adeudadas.

Contra dicho decisorio, el 07.10.2019 la firma involucrada, mediante apoderada, interpuso recurso de apelación en los términos de los artículos 120 a 122 del Código Fiscal, según de este modo lo expresó.

En fecha 22.11.2019 la Administración Provincial de Impuestos dictó la Resolución N°104/19-IND (fs. 1956/1957), por la cual concedió el recurso de apelación incoado por PAMPA ENERGÍA S.A. contra la resolución mencionada en el encabezado.

Dando trámite a la impugnación, se corrió traslado para la expresión de agravios en fecha 02.11.2020 (fs. 1967/y vlta.), ingresando su memorial la recurrente el 09.08.2023 (fs. 1968/1988).

La Dirección General de Asesoría Letrada del Ministerio de Economía a través del dictamen de su competencia (fs. 2000/2006), aconsejó no hacer lugar al recurso interpuesto.

Conforme foja 2007 vlta., en fecha 01.03.2024 se elevan las presentes actuaciones a ésta Fiscalía de Estado para su consideración.

B

Los agravios de la recurrente se focalizan en torno a las siguientes cuestiones: prescripción total de las facultades del fisco para determinar las obligaciones tributarias y aplicar sanciones por infracciones sobre los períodos fiscales 2005 y 2006, sea acudiendo para su cómputo tanto al plazo de cinco años establecido en el Código Civil (art. 4027) y en la norma local (art. 115 CF), citando diversa jurisprudencia (Filcrosa, entre otros); la insistencia en que la resolución determinativa resulta nula y que no fue subsanada por la Resolución N° 107/2018; que la resolución omitió tratar los planteos relativos a los invocados errores de la liquidación del ISIB; que considera improcedente la aplicación de los intereses, fundando su postura en la inexistencia de mora de su parte, por lo tanto no habría atraso en el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales; siendo finalmente otro de sus agravios, la improcedente de la sanción aplicada lo que introduce a modo de hipótesis para el caso que no se acoja su defensa de prescripción, alegando en respaldo de ello la inexistencia de infracción al no haberse configurado el elemento subjetivo propio de la sanción impuesta, postulando en subsidio de ello, la verificación en el caso de un error excusable.

Hace reserva del caso constitucional y federal.

- II -

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN

A

El recurso traído a examen resulta admisible por cuanto ha sido interpuesto dentro del plazo legal (cfr. art. 120 del CF) considerando las fechas de notificación de la resolución impugnada (v. fs. 1799/1800) y de la interposición del recurso (v. fs. 1801/1804).

En el mismo sentido vale sostener la admisibilidad, ya que el memorial de agravios luce presentado en tiempo hábil, constando también el pago previo exigido en la ultima parte del art. 120 del CF.

B

Sin perjuicio de lo dicho, en lo sustancial se adelanta de que el recurso examinado no ha de prosperar por las siguientes consideraciones.

1. En primer lugar, cabe coincidir con lo sostenido por el servicio permanente de asesoramiento ministerial obrante a fojas 2000/2006 por cuanto su intervención, atento la especialidad y habitualidad en el

tratamiento de problemática fiscal, resulta idónea y razonada.

2. En lo que respecta al tratamiento de los agravios, se adelanta que los mismos no tendrán favorable acogida.

2.1. Sobre el primer agravio, vinculado al planteo prescriptivo que aduce haber operado respecto a los reajuste impositivos perseguidos, corresponde aseverar que lo postulado por la recurrente carece de sustento fáctico y jurídico, perdiendo eficacia sus argumentos a poco de examinar el trámite de fiscalización llevado a cabo por el organismo recaudador provincial, del cual surge que por el período verificado (enero de 2006 a abril de 2008) se libró requerimiento y se notificó el inicio de inspección a la encartada el 15.05.2008 (fs. 39/40), recepcionada por la recurrente (f. 39), llevada a cabo en oficinas de la sumariada en fecha 27.11.2008 y 16.04.2009 (cfr. fs. 1135 y 1134, respectivamente), por lo cual es evidente que la actuación de la A.P.I. estuvo en conocimiento de la impugnante durante el procedimiento de determinación llevado a cabo por el ente fiscalizador, sin que se haya verificado el transcurso del plazo de paralización propio de la prescripción, según lo dispone el digesto fiscal.

Incluso resulta contradictorio el planteo, por cuanto la propia contribuyente utilizó la vía recursiva prevista por el ordenamiento local para ejercer su derecho de defensa, postergando la firmeza y ejecutoriedad del acto administrativo determinativo.

Al respecto ésta Fiscalía de Estado tiene dicho que "(...) *tampoco resulta acertado alegar la prescripción de una obligación mientras se sustancia y agota la vía*



administrativa puesto que la Administración a través del organismo pertinente ha realizado las diligencias necesarias tendentes a efectivizar el cobro de la acreencia y esta actividad ha sido repelida por los recurrentes a través del sistema de recursos, con lo cual mal puede pretender -y admitirse- que exista una presunción de que el Estado ha abandonado su intención de percibir lo debido, debiendo computarse a esos fines que no existió una paralización total por el plazo de prescripción, existiendo un sinnúmero de actuaciones internas tendentes a dar solución a los planteos recursivos de quien ahora pretende prevalerse de los efectos del tiempo" (Dictámenes, Nros. 1299:2011, 85:2016, entre otros).

Y más recientemente se expidió en igual sentido la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en autos "Municipalidad de Rosario c/ Nestlé Argentina S.A. -Apremio- s/ Recurso de Inconstitucionalidad" del 21-10-2014 y "Municipalidad de Rosario c/ Merengue S.R.L. -Ejecución Fiscal- s/ Recurso de Inconstitucionalidad" del 28-07-2015, en el sentido que los plazos de prescripción no corren mientras se sustancia el procedimiento recursivo en sede administrativa.

2.2. En lo atinente al segundo y tercero de los agravios, no resulta invalidante de la actuación del organismo fiscal provincial lo argumentado por la quejosa, no dejando de ser la crítica desplegada -en definitiva- su evidente disconformidad con el criterio de la Administración, el cual luce sustentado fundamentalmente en las constancias actuariales (aportadas muchas de ellas por la propia gestionante) y en disposiciones normativas de aplicación habitual en materia tributaria, tanto locales como interjurisdiccionales, que la quejosa no

puede desconocer, máxime si atendemos a la importancia de dicha empresa a nivel nacional e internacional.

Esta Fiscalía tiene dicho que no resultando éste órgano de asesoramiento del Ejecutivo provincial el adecuado para la realización de los cálculos y liquidaciones para la determinación de la base imponible del tributo en cuestión, habrá de atenerse a los informes técnicos elaborados por las reparticiones de la A.P.I., competentes en la materia (cfr. fs. 1173/1175 y 1706/1709 vlta.), y que obran glosados en autos (*Dictámenes*, 506:2013), por lo que teniendo en cuenta la plena fe que, en general, merecen aquellas actuaciones técnicas, no se encuentran razones para apartarse de las conclusiones delineadas por aquella asesoría ministerial, por resultar serias y precisas y no lucir arbitrariedad aparente (*Dictámenes*, 217 a 219, 226 y 236/2023).

Por ello la actuación del ente recaudador a lo largo del procedimiento de determinación tributaria luce ajustada a la normativa y a los criterios administrativos técnicos y jurídicos que habitualmente son de aplicación sobre la materia por la A.P.I., por lo que no puede reprochársele ilegitimidad y/o irrazonabilidad en su proceder, por lo tanto si la recurrente consideró que ello no ha sucedido en estas actuaciones, no se han aportado elementos argumentales ni probatorios que autoricen a reconsiderarlo.

En este contexto, resulta mendaz que la resolución omitió tratar las postulaciones relativas a la liquidación del ISIB, lo que se verifica a partir de las explicaciones brindadas en el acto recurrido, puntualmente en los considerandos desarrollados a fojas 1178/1179, como ser "*Que las razones por las que se llegó a la presente determinación, responden a la incorrecta detracción del*



crédito correspondiente a Derecho de Registro e Inspección, en razón de haberse pagado dicho tributo en forma extemporánea durante el período 2005. Y durante el período 2006 la firma no exteriorizó en sus DDJJ mensuales importe alguno del impuesto determinado, según surge del informe de tareas menciona *ut-supra*; Que por otra parte al efecto de la referida determinación, se computarán exclusivamente las retenciones y/o percepciones incluidas en el sistema informático de la Administración, en razón de que "las retenciones y/o percepciones soportadas en concepto de Ingresos Brutos aportadas por la firma no eran coincidentes con las detraídas en los anticipos mensuales, ni con las que informa el sistema Osiris".

2.3. Similares argumentos que los delineados en los dos apartados que anteceden corresponden aplicarlos respecto a los agravios cuarto y quinto, que devienen improcedentes.

En efecto, no puede la apelante pretender ignorar livianamente las disposiciones aplicadas para la determinación impositiva que tramitó en estos actuados, sea las vinculadas con el Código Fiscal como las aplicables del convenio multilateral, al cual las empresas que producen, fabrican y comercializan de manera interprovincial deben atender ineludiblemente, por cuanto como es el caso de la firma involucrada hace a su actividad comercial e industrial habitual el conocimiento y aplicación de la normativa propia de las jurisdicciones territoriales donde habrán de operar, ya que se trata de derecho positivo provincial y/o interjurisdiccional.

Sobre esta cuestión, esta Fiscalía de Estado, con cita a la Corte Suprema local, ha expresado que la obligación de pagar un tributo, dentro de un plazo determinado, responde a la necesidad de que el Estado

cuenta con los recursos destinados a la ejecución del presupuesto a tiempo y en forma ordenada; y que se trata de una infracción prevalementemente objetiva, por lo cual, en principio, basta el hecho externo del no pago en término para que se tenga por configurada (CSJSF, A. y S., T. 44, p. 275, "*Banco de Crédito Argentino c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción*", 12/08/1981) (Dictámenes, Nros. 180:2022 y 23, 24 y 26:2023, este órgano recordó).

A su vez, en el primero de aquellos dictámenes se trajo una serie de precedentes administrativos en los que se afirmó que la multa como la impuesta a la contribuyente tiene carácter objetivo, y que su aplicación se encuentra tasada en la ley ante la verificación del incumplimiento.

Respecto al error excusable resulta procedente cuando pueda concluirse que el contribuyente pudo, razonablemente, entrar en una confusión sobre el tributo o la alícuota que le correspondía abonar -más aún cuando ello provenga de modificaciones a la ley y el interesado acredita buena conducta fiscal-.

De todos modos, se advirtió que no hay error excusable cuando el contribuyente se aparta explícitamente de las normas establecidas, su conducta no se ajusta a decisiones jurisprudenciales reiteradas, oculta ingresos o efectúa deducciones en manifiesta oposición a normas legales -tanto más no siendo un infractor primario- (Dictámenes Nros. 544:2015, 237:2017, 23 y 26:2023, por citar los últimos).

En el caso no se ha acreditado ninguno de los supuestos admitidos para su configuración, ya que la

determinación es producto de una interpretación razonable de la norma legal.

3. Por los motivos expresados, puede afirmarse que la resolución impugnada reúne todos los elementos que permiten considerarla válido, y que contrariamente, los agravios expresados por los apelantes en modo alguno justifican una revisión de lo actuado.


- III -

CONCLUSIÓN


En los términos expuestos, aconsejo al Poder Ejecutivo desestimar el recurso de apelación impetrado PAMPA ENERGIA S.A. (antes PETROBRAS ENERGIA S.A.), contra la Resolución N°107/18-IND dictada por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.).

DESPACHO, 12 MAR 2024

Eud.R.


EUDORO P. ROSAS
ASESOR - APODERADO
FISCALÍA DE ESTADO




DR. DOMINGO RONDINA
FISCAL DE ESTADO DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE

